



GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

www.pan.senado.gob.mx



Senado de la República

16 de marzo de 2008

México, al frente del Grupo de Río

Adriana González Carrillo, Reforma



México debe ocupar un espacio importante en América Latina y el Caribe por su peso económico, comercial, por el valor de su interlocución política y por las dimensiones de su demografía. Sin embargo, para asumir esa posición el diseño de una estrategia de política exterior no debe partir por considerar a la región como un bloque homogéneo, sino más bien como una vasta geografía con realidades y entidades distintas y divergentes, tanto en lo geopolítico, institucional y demográfico, como en sus niveles de desarrollo. Esa complejidad y la necesidad de respuestas eficaces necesitan de un mecanismo de diálogo y cooperación sólido mediante un alto grado de institucionalización. Creado en 1986, el Grupo de Río o Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política de América Latina y el Caribe es el principal foro político y de cooperación de la región. Durante la XX Cumbre, México recibió de República Dominicana la Secretaría Pro-Témpore del Grupo de Río por un periodo de dos años y será la sede de la próxima XXI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno. Su importancia no puede ser obviada, ya que este espacio de concertación está integrado por 20 países que representan al 94 por ciento de los 568 millones de habitantes, el 98 por ciento del PIB y el 97 por ciento de la producción petrolera de la región.

Para México, encabezar el Grupo de Río implica atender las peculiaridades latinoamericanas que si bien pueden traducirse en oportunidades también presentan conflictos y desafíos de distinta naturaleza, ante los cuales es preciso plantear un enfoque selectivo y dinámico en materia de política exterior. Ello, porque los retos de la región cubren fenómenos que van desde el atraso en materia educativa, el narcotráfico, la migración indocumentada, la pobre infraestructura de comunicaciones, hasta el resurgimiento de los populismos y de las tendencias antidemocráticas. Esos fenómenos, en ciertos momentos y coyunturas, adquieren una dimensión regional de inestabilidad política y social que a inicios del siglo XXI son el reto más apremiante. Un ejemplo de ello fue el conflicto entre Ecuador y Colombia por la incursión armada para ultimar a un líder importante de las FARC que produjo una gran tensión diplomática y una potencial contienda armada que sumó a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, ante la cual México ofreció en todo momento sus oficios en favor de la paz. Visto en perspectiva, esta última disputa se presenta en un escenario mayor que debe ser considerado y que está dado por varios signos de inestabilidad regional que parten de la zona andina. Una primera señal se dio a fines de la década de los noventa cuando se encendieron los focos rojos por las repercusiones regionales del Plan Colombia, lanzado en las postrimerías del gobierno de Clinton. La inestabilidad se hizo clara a principios del año 2000, cuando en Ecuador movilizaciones populares y militares derrocaron al gobierno de Jamil Mahuad, para ser reemplazado por una efímera Junta de Salvación Nacional que intentó poner fin a la dolarización de la economía ecuatoriana. En ese mismo año, en Perú se le impidió a Alberto Fujimori reelegirse por tercera vez. En Argentina, el rechazo social ante medidas económicas

que secuestraron los ahorros de la clase media obligó a renunciar al presidente Fernando de la Rúa a fines de 2001.

Las manifestaciones de inestabilidad continuaron con el breve golpe de Estado en Venezuela, el 11 de abril de 2002, contra Hugo Chávez. En octubre de 2003 fue derrocado el presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada por una movilización indígena y popular; en tanto que, a inicios de 2004, Haití fue ocupado por una fuerza militar de Naciones Unidas para estabilizar su vida social y política. En junio de 2005, el presidente boliviano Carlos Mesa renunció por protestas populares, cuya inestabilidad desembocó en las elecciones que pusieron en la presidencia a Evo Morales, primer mandatario indígena del siglo XXI, quien el 1o. de mayo de 2006 nacionalizó los hidrocarburos bolivianos. También en 2005 el Congreso de Ecuador destituyó al presidente Lucio Gutiérrez, después de fuertes presiones sociales y del retiro del apoyo militar. Desde ese mismo año persiste una grave disputa política y ambiental por la instalación de dos fábricas de celulosa en la costa oriental entre Uruguay y Argentina.

Si bien de 2005 a 2007 se eligieron gobiernos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Surinam y Venezuela, lo cual representa el 80 por ciento de la población latinoamericana, el cuestionamiento a las instituciones políticas y a la calidad de algunas democracias no ha cesado. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez no logró su nuevo proyecto de Constitución, que entre otras cosas le hubiera permitido reelegirse de manera indefinida. Poco después empezó a asumir el papel de mediador en el conflicto entre las FARC y el gobierno de Colombia. Chile, por su parte, mantiene potenciales conflictos por la salida al mar de Bolivia, por los límites territoriales con Perú y con Argentina por las fallas en el abastecimiento de gas. Con el inicio del 2008, el panorama no se presenta muy alentador: Fidel Castro anunció su decisión de no ser considerado para el cargo de presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe. Frente a la expectativa mundial de una posible transición política en Cuba, la designación de Raúl Castro y del gabinete mostró, según algunos académicos, una falta de apertura para incorporar a las nuevas generaciones, prevaleciendo la sucesión del poder por la élite revolucionaria.

Oportunidad y desafío

Frente a ese panorama, México a través del Grupo de Río tiene la oportunidad de fortalecerlo institucionalmente, coordinar y concertar bajo su perspectiva acciones que atiendan los retos de la inestabilidad y, así, relanzar su política hacia América Latina y el Caribe con propuestas novedosas, realistas y pragmáticas. Para los mexicanos, ello implica echar mano de nuestro compromiso histórico con una diplomacia de principios y respeto al derecho internacional a fin de mejorar las oportunidades para la paz y la democracia, la superación de los graves y potenciales conflictos existentes y el aprovechamiento de mejores vías para garantizar la seguridad y la estabilidad de la región.

Para replantear nuestra relación con América Latina y el Caribe se debe establecer una política exterior selectiva, con sólidos socios estratégicos, ubicada en áreas de interés inmediato. Debe ser dinámica y realista dejando de lado la retórica y las inercias del pasado. Ello supone que México debe establecer relaciones estratégicas con algunos países en América del Sur, principalmente y de manera prioritaria con Brasil, indiscutible líder regional, además de Chile, Argentina y Colombia, países con los que compartimos afinidades, aspiraciones y responsabilidades importantes. También debe considerar a Guatemala, Belice y Cuba por ser parte de su área de interés inmediato, lanzando y consolidando iniciativas en materia de seguridad, negocios, tecnología, turismo, transporte e infraestructura.

La agenda es muy amplia y el reto mayúsculo. Un buen comienzo, sin embargo, sería asegurarse de contar con el perfil adecuado para nuestra embajada en Colombia, en función de estos propósitos generales y con el cometido específico de aportar a una solución duradera y asegurar la cooperación mutua para combatir juntos el crimen organizado. Al mismo tiempo

sería deseable que bajo la Secretaría mexicana del Grupo de Río se impulse la incorporación de Cuba, a fin de que participe en la XXI Cumbre a realizarse en nuestro país en 2009.

La autora es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República.